



Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 8 SECRETARÍA
N°15

GCBA CONTRA IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A. SOBRE EJECUCION FISCAL - ABL - PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

Número: EXP 228989/2021-0

CUIJ: EXP J-01-00228989-6/2021-0

Actuación Nro: 341135/2024

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -

Vistos: Estos autos en estado de resolver,

Y Considerando: I.- En la actuación N° 2398927/2021 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) promovió la presente ejecución fiscal contra IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A. por la suma de cuatro millones quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco con setenta y seis centavos (\$4.574.425,76) a fin de perseguir el cobro de la deuda reclamada en concepto de Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley Nacional N° 23.514 - Impuesto Inmobiliario, Tasa retributiva de los Servicios de ABL, Mantenimiento y Conservación de Sumideros por los períodos 1 a 12 del año 2020.

Por conducto de la actuación N° 1275463/2022, se presentó IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A. y opuso excepción de inhabilidad de título por inexistencia manifiesta de deuda. En efecto, sostuvo que se trata de una empresa inscripta en el Registro de Empresas TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y que, en virtud de ello, se encuentra exenta del pago del tributo reclamado hasta el 31 de enero de 2029, conforme Ley 2972 -modificada por Ley 5234 y posteriores textos ordenados- y el vigente en la actualidad.

En lo que aquí importa, discutió el alcance temporal de la exención prevista en la normativa citada. Señaló que la Ley 2972 dispuso una exención por diez años, contados a partir de su sanción (30/1/2009), para los inmuebles situados en el denominado Distrito Tecnológico siempre que se realicen sobre aquellos obras nuevas o mejoras y se los destine a alguna de las actividades relacionadas con el desarrollo tecnológico enumeradas en su artículo 2. Expresó que dicho beneficio fue otorgado a la empresa y que la norma citada fue modificada por la Ley 5234. Allí se determinó que los sujetos

inscritos en el Registro de Empresas TIC se encuentran exentos de la obligación de ingresar el pago del ABL hasta el 30/1/2029. Entendió que la nueva norma le resulta aplicable en virtud de su artículo 14 que establece: *“Las disposiciones de la presente Ley no perjudican, disminuyen o restringen los beneficios otorgados en el marco de la Ley 2972, y deben entenderse como complementarias de los mismos”*. De esta manera, argumentó que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 5234, la empresa pasó a estar exenta del tributo aquí reclamado, ya no por diez años, sino hasta el 30 de enero de 2029.

Por último, ofreció prueba e hizo reserva del caso federal.

Corrido el traslado pertinente, por medio de la actuación N° 3611255/2022, el GCBA contestó la excepción opuesta por la parte demandada.

En primer lugar, destacó que su contraria efectuaba una equívoca interpretación de la normativa aplicable al caso y que la exención allí consagrada finalizó el 30 de enero de 2019, siendo a partir de dicha fecha que IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A. volvió a ser responsable del pago de la obligación tributaria.

A mayor abundamiento, sostuvo que la Resolución N° 4875/DGR/2009 (que declara la inscripción de la demandada en el régimen establecido por la Ley 2972) prevé que los plazos aplicables son aquellos contenidos en la mencionada norma vigente al momento de dictarse la referida resolución. Asimismo, manifestó que la modificación de los plazos y extensiones que hace la Ley 5234 no operan en forma automática, ni modifican o amplían los plazos de los beneficios ya otorgados primigeniamente en función de la ley vigente al momento de serles reconocidos. En esta línea, la actora sostuvo que no habría operado de modo alguna una extensión retroactiva del plazo del beneficio, ni se habría ampliado el mismo como entiende su contraria.

Por último, ofreció prueba e hizo reserva del caso federal.

Luego de diversas vicisitudes procesales relativas a la prueba, en la actuación N° 173888/2024 pasaron los autos a resolver.

II.1.- Inhabilidad de título: La excepción de falsedad o inhabilidad de título se encuentra consagrada en el art. 453 inc. 6 del CCAyT, el cual dispone como una de las excepciones admisibles la *“falsedad o inhabilidad de título basada exclusivamente en vicios de forma en la boleta de deuda”*.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 8 SECRETARÍA
N° 15

GCBA CONTRA IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A. SOBRE EJECUCION FISCAL - ABL - PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

Número: EXP 228989/2021-0

CUIJ: EXP J-01-00228989-6/2021-0

Actuación Nro: 341135/2024

Por su parte, el art. 452 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires establece: *“El cobro judicial de todo tributo, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones y de las multas ejecutoriadas que determinen las autoridades administrativas, se hace por vía de ejecución fiscal establecida en este código, sirviendo de suficiente título, a tal efecto, la boleta de deuda expedida por la Dirección General de Rentas y Empadronamientos, organismo equivalente o por la autoridad que aplique la multa”*.

A su vez, el artículo 509 del Código Fiscal para el año 2021, aplicable al presente caso consagra: *“Para el cobro judicial de los impuestos, tasas y contribuciones fijados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será suficiente título ejecutivo la constancia de deuda suscripta por funcionario autorizado de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos”*. Surge claro así, que la constancia de deuda expedida por funcionario autorizado constituye título ejecutivo a los fines de la ejecución fiscal que el código regula.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha sostenido: *“si bien no hay una regulación de derecho positivo en el orden local que establezca los requisitos imprescindibles de la boleta de deuda, la doctrina y la jurisprudencia han sido contestes en enumerar aquellos elementos que necesariamente debían conjugarse en dicho instrumento para que pueda cumplir eficazmente su cometido. (...) En tal sentido, suele enfatizarse que el título ejecutivo debe contener: a) lugar y fecha donde se libra, b) firma del juez administrativo o funcionario habilitado al respecto, c) nombre del obligado, d) indicación precisa del concepto e importe del crédito con especificación, en su caso, del tributo y ejercicio fiscal al que corresponda, e) domicilio fiscal del contribuyente y f) cuando existan deudores solidarios, su mención y las circunstancias que originan la solidaridad”* (TSJ, "Papaecononou, Jorge sobre queja

por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA contra Papaecononou, Jorge sobre ejecución fiscal"', Expte. 7732/2010, del voto del Dr. José Osvaldo Casás).

Cabe aclarar que la inhabilidad de título solo puede fundarse en vicios extrínsecos de la boleta de deuda, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa o antecedentes de la misma, dado que la solución contraria implicaría desvirtuar la naturaleza sumaria del juicio ejecutivo.

En cuanto a la boleta de deuda perteneciente a las presentes actuaciones, se advierte que contiene todos los requisitos enumerados por la jurisprudencia (lugar y fecha donde se libró, firma del funcionario administrativo habilitado, indicación precisa del concepto e importe del crédito con indicación del tributo y ejercicio fiscal al que corresponde, domicilio fiscal del contribuyente).

Ahora bien, en relación a la causa del título, ha dicho la doctrina: “*No corresponde examinar la causa cuando el título reúne todos los requisitos relacionados con la habilidad del mismo, pues dicha cuestión excede el juicio ejecutivo*” (confr. Falcón, Enrique: Comentario al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Leyes Complementarias, Editorial Abeledo- Perrot, Buenos Aires, pág. 897, quien también cita en apoyo de su postura CNCiv., Sala B, L.L. 134-1036, sum. 20.018; CNCom., Sala A, J.A., 1982-II-sínt, entre muchos otros).

Sin perjuicio de ello, lo dicho no obsta a que dentro del marco del juicio ejecutivo pueda examinarse la causa cuando el planteo involucra su inexistencia. Máxime cuando tal circunstancia resulta manifiesta de las propias actuaciones, pues lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de las garantías constitucionales.

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: “*Aun cuando la apelación se dirige contra lo resuelto en un juicio de ejecución fiscal, esta Corte ha admitido excepcionalmente la procedencia de la vía extraordinaria cuando resulta manifiesta la inexistencia de deuda exigible, en razón de que lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales (Fallos: 278:346; 298:626; 302:861; 318:1151; 319:1260, entre muchos otros)*” (CSJN, in re: “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Román S.A. Comercial s/ejecución fiscal”, de fecha 14 de junio de 2001).



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 8 SECRETARÍA
N°15

GCBA CONTRA IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A. SOBRE EJECUCION FISCAL - ABL - PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

Número: EXP 228989/2021-0

CUIJ: EXP J-01-00228989-6/2021-0

Actuación Nro: 341135/2024

Por lo tanto, al haber admitido la Corte el tratamiento de la causa de la obligación cuando la cuestión atañe a su misma existencia, cabe proceder de esta forma en las presentes actuaciones.

II.2.- A la luz del encuadre efectuado, toda vez que la exención que aquí se analiza y que conduce a la excepción opuesta por la parte demandada se funda en la Ley 2972, es dable analizar dicho régimen normativo y sus modificaciones. Vale decir que la cuestión se ciñe a la discrepancia existente en cuanto a la forma de interpretar la normativa en cuestión. Por un lado, el GCBA entiende que los beneficios tributarios (exenciones) que se detallarán a continuación finalizaron en enero de 2019, mientras que la demandada entiende que dichos beneficios fueron prorrogados por las leyes modificatorias de la Ley 2972

La Ley 2972 de Promoción de las Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (publicada en el BOCBA 3101 del 22/1/2009), en su redacción original, creó, según su artículo 1° *“el Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante ‘el Distrito’, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras”*.

El artículo 2° estableció que *“[s]on beneficiarias de las políticas de fomento previstas por la presente ley, las personas humanas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad en el mismo se refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de la realización de alguna de las siguientes actividades: // a. Desarrollo, mantenimiento y/o actualización de: 1. Productos de software. 2. Software a medida. 3. Software embebido o insertado. 4.*

Portales web. 5. Plataformas o aplicaciones informáticas, tanto en web como móviles, destinadas para el uso de terceros”.

Los artículos 6° y 7° de dicho régimen crearon el Registro de Empresas TIC, estableciendo que la *“inscripción en el Registro es condición para el otorgamiento de los beneficios que establece la presente Ley”* (cfr. artículo 6°). *“Las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 2° deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, a cuyo efecto deben acreditar: a) Su efectiva radicación en el Distrito, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. b) Que las actividades promovidas se desarrollan en el Distrito, con excepción de aquellas que por su propia índole deban ser preponderantemente ejecutadas en establecimientos de terceros. En caso de que el beneficiario posea su establecimiento principal, o uno o más establecimientos, sucursales, oficinas o instalaciones de cualquier tipo fuera del Distrito, los beneficios de esta Ley sólo son aplicables en la medida en que las actividades promovidas sean desarrolladas dentro del mismo”* (art. 7°).

Posteriormente, en lo que aquí interesa, el artículo 8° de la norma bajo análisis, dispuso un régimen de incentivos promocionales para el distrito tecnológico, en la medida que *“las empresas radicadas en el Distrito Tecnológico reciben el tratamiento tributario establecido en el presente Capítulo, siempre y cuando se encuentren en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas locales y nacionales”*.

Por su parte, en lo que concierne al tributo aquí reclamado, la norma bajo análisis consagró en su artículo 16 que *“[e]stán exentos del pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras establecidas en el Título III del Código Fiscal, durante un plazo de diez (10) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los inmuebles ubicados dentro del Distrito Tecnológico, sobre los cuales se realicen obras nuevas o mejoras, que se destinen principalmente al desarrollo de alguna de las actividades comprendidas en el artículo 2°, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 499 (BOCBA N° 1014). Se entiende que el destino principal referido en el párrafo anterior se cumple cuando más de la mitad de la superficie del inmueble se encuentra destinada específicamente al desarrollo de las actividades promovidas, en las condiciones que establezca la reglamentación”*.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 8 SECRETARÍA
N° 15

GCBA CONTRA IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A. SOBRE EJECUCION FISCAL - ABL - PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

Número: EXP 228989/2021-0

CUIJ: EXP J-01-00228989-6/2021-0

Actuación Nro: 341135/2024

Por su parte, cuadra señalar que, a partir de su modificación, el artículo 18 de la Ley 2972 en su actual redacción contempla que “[l]os sujetos inscriptos en el Registro Único de Distritos Económicos, se encuentran exentos de la obligación de ingresar el Impuesto Inmobiliario Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, por el plazo **establecido en el artículo 17**, respecto de los inmuebles ubicados dentro del Distrito que se destinen principalmente, en las condiciones que establezca la reglamentación, al desarrollo de algunas de las actividades promovidas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 499 (Texto Consolidado por Ley 5666). Se entiende que el destino principal referido en el párrafo anterior se cumple cuando más de la mitad de la superficie se encuentra destinada específicamente al desarrollo de las actividades promovidas, en las condiciones que establezca la reglamentación” (el destacado me pertenece). En ese contexto, el artículo 17 de dicha norma, refiere que “[e]l régimen establecido en la presente Sección rige hasta el 31 de enero de 2029”.

En adición, la Ley 5234, mediante su artículo 14, destacó que “[l]as disposiciones de la presente Ley no perjudican, disminuyen o restringen los beneficios otorgados en el marco de la Ley 2972, y deben entenderse como complementarias de los mismos”.

Posteriormente, se sancionó la Ley 6136 (publicada en el BOCBA 5533 del 09/1/2019).

Dicha norma, en lo que aquí refiere, creó el “Registro Único de Distritos Económicos”, en el cual quedaron comprendidos, entre otros, “(...) los Registros creados por el artículo 6° de la Ley 2972 (Texto Consolidado por Ley 6017) (...)”. En ese contexto, se sustituyó el artículo 6° de la Ley 2972, disponiéndose en su lugar que “[l]a inscripción en el Registro Único de Distritos Económicos, podrá ser de forma

provisoria o definitiva según el caso y resulta condición para el otorgamiento de los beneficios que establece la presente Ley. La autoridad de aplicación establecerá las condiciones para dichas inscripciones”.

Por otra parte, el artículo 7° de la Ley 6136, reemplazó en todo el cuerpo de la Ley 2972 (Texto consolidado por Ley 6017) la mención al *"Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Registro de Empresas TIC)"* por *"Registro Único de Distritos Económicos"*.

A continuación, la Ley 6392 (publicada en el BOCBA 6031 del 08/1/2021), complementaria de la Ley 2972, en su artículo 3° individualiza a los beneficiarios del contemplados en el régimen. El artículo 9°, establece como condición para el otorgamiento de los beneficios *“la inscripción en el Registro Único de Distritos Económicos, o el que en el futuro lo reemplace”*.

En ese entendimiento, el artículo 10° determina que la inscripción al Registro Único de Distritos Económicos *“tendrá carácter de definitiva o provisoria, de acuerdo con si al momento de solicitarla los sujetos se encontraren efectivamente radicados en el Distrito o bien, tuvieren la intención de radicarse, cumpliendo asimismo las restantes condiciones establecidas para cada modalidad”*.

A su vez en el capítulo III del Título V de la norma se regulan los *“INCENTIVOS PROMOCIONALES PARA EL DISTRITO TECNOLÓGICO”*, en particular en el artículo 43 el tributo aquí reclamado.

Allí se señala que los *“sujetos inscriptos de forma definitiva en el Registro Único de Distritos Económicos se encuentran exentos de la obligación de ingresar el Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, respecto de los inmuebles ubicados dentro del Distrito que se destinen de modo principal al desarrollo de algunas de las actividades promovidas”*.

La vigencia del régimen se estableció hasta el 31 de enero de 2035 (art. 59).

Finalmente, a fin de echar claridad sobre la cuestión, la norma estableció de forma expresa que el *“régimen establecido por la Ley 2972 - en su versión de texto consolidado por Ley 5666 -, mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con inscripciones provisionales o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos que se hayan encontrado en trámite o finalizadas al 31 de enero de 2018”* y que el



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 8 SECRETARÍA
N° 15

GCBA CONTRA IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A. SOBRE EJECUCION FISCAL - ABL - PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

Número: EXP 228989/2021-0

CUIJ: EXP J-01-00228989-6/2021-0

Actuación Nro: 341135/2024

“régimen establecido por la Ley 2972 - en su versión de texto consolidado por Ley 6347 - mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con inscripciones provisionales o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley” (cláusulas transitorias primera y segunda de la Ley 6392, respectivamente).

II.3.- De la normativa reseñada se desprende que el Legislador estableció una serie de beneficios de índole tributaria para aquellos sujetos que, radicados dentro del Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollaran las actividades catalogadas por la norma en cuestión.

A tal fin, se determinaron distintas condiciones para acceder a dichos beneficios, una de las cuales es la inscripción en el “*REGISTRO DE EMPRESAS TIC*” (cfr. art. 6 y 7 de la Ley 2972), actualmente denominada “*Registro Único de Distritos Económicos*” (conf. Leyes 6136 y 6392 ya citadas).

A su vez, de la normativa reseñada, se desprende que el plazo de vigencia de los beneficios otorgados, fue **extendiéndose** a través de la modificación de la norma primigenia, la Ley 2972. En un principio, se contempló la exención al pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras establecidas en el Título III del Código Fiscal, durante un plazo de diez (10) años contados a partir de la entrada en vigencia de la norma que lo dispuso (22/1/2009), para aquellos inmuebles ubicados dentro del Distrito Tecnológico, que reunieran las condiciones previstas por la normativa.

Antes de que venza el plazo original, aquél fue extendido por la Ley 5234 (publicada en el BOCBA 4562 del 20/01/2015), modificatoria de la Ley 2972, que

amplió los beneficios hasta el 30 de enero de 2029. Agregó, en su artículo 14, que las disposiciones de dicha norma, *“no perjudican, disminuyen o restringen los beneficios otorgados en el marco de la Ley 2972, y deben entenderse como complementarias de los mismos”*.

Seguidamente, la Ley 6392, complementaria de la Ley 2972, mantuvo los beneficios en cuestión en lo que refiere al tributo reclamado, bajo la condición de permanecer inscripto en el *“Registro Único de Distritos Económicos, o el que en el futuro lo reemplace”*. Del mismo modo, amplió la vigencia del régimen hasta el 31 de enero del año 2035.

Dicha norma también mantuvo el régimen de incentivos para aquellos sujetos con inscripciones provisionales o definitivas en el Registro Único de Distritos Económicos al día 31 de enero de 2018 (en caso de estar sujetos al régimen establecido por la Ley 2972 -texto consolidado por Ley 5666-) y respecto de los beneficiarios con inscripciones provisionales o definitivas en el Registro Único de Distritos Económicos, a la misma fecha (31/1/2018) y anteriores a la entrada en vigencia de la ley 6392 (para el supuesto de encontrarse bajo el régimen de la Ley 2972 -en su versión de texto consolidado por Ley 6347).

II.4. Una vez reseñado el marco normativo, corresponderá hacer referencia a los actos administrativos a través de los cuales se otorgó el beneficio previsto por la normativa a la empresa demandada, en relación al tributo reclamado en autos.

A través de la Resolución 4875/DGR/2009 de fecha 22/12/2009 (ver actuación n° 128871/2024), se declaró a la firma IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A. comprendida dentro del régimen establecido por la Ley 2972. Allí se la eximió del pago del impuesto inmobiliario y tasa retributiva de los servicios de alumbrado barrido y limpieza, mantenimiento y conservación de sumideros, con los alcances establecidos en el artículo 16 de dicha norma.

A continuación, se determinó que la exención señalada incluía a aquellos inmuebles ubicados dentro del Distrito Tecnológico, en los que se realizaran obras nuevas o mejoras que se destinen principalmente al desarrollo de algunas de las actividades comprendidas en el artículo 2° de la Ley 2972, en consonancia con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la norma.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 8 SECRETARÍA
N°15

GCBA CONTRA IRON MOUNTAIN ARGENTINA S.A. SOBRE EJECUCION FISCAL - ABL - PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

Número: EXP 228989/2021-0

CUIJ: EXP J-01-00228989-6/2021-0

Actuación Nro: 341135/2024

Por otro lado, la Disposición N° 75/DGISyT/09 estableció la incorporación definitiva al Registro de Empresas Tecnológicas creado por la Ley 2972 (ver actuación n° 128871/2024).

De lo informado por la AGIP, la empresa demandada gozó de la exención en cuestión durante por el período que va desde el 16/11/2009 hasta el 30/1/2019 (ver actuación n° 1376549/2023). Ello invita a presumir que estuvo inscripta en el registro correspondiente.

Así las cosas, la Ley 5234, en el año 2015, o sea durante el transcurso del período durante el cual la empresa gozaba de la exención, extendió la vigencia del régimen previsto en la Ley 2972 hasta el 30 de enero de 2029 y agregó que las *“empresas que se encuentren comprendidas en la Ley Nacional N° 25.300, Ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa y sus modificaciones respectivas, o sean de capitales nacionales, gozarán del régimen establecido en la presente Sección hasta el 30 de enero de 2034”*.

En dicho contexto, se dictó la ley 6392 ya citada. Allí el Legislador mantuvo los beneficios otorgados en las normas mencionadas. En particular estableció que el *“régimen establecido por la Ley 2972 - en su versión de texto consolidado por Ley 5666- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos que se hayan encontrado en trámite o finalizadas al 31 de enero de 2018”*. En el mismo sentido determinó que el *“régimen establecido por la Ley 2972 - en su versión de texto consolidado por Ley 6347 - mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley”*.

Ahora bien, de las constancias incorporadas en autos, no surge que la incorporación al Registro mencionado haya finalizado a la fecha. Cabe agregar que, ante el pedido a la AGIP de que informe las razones por las cuales la empresa demandada habría dejado de estar exenta del pago de ABL, aquél nada dijo (ver actuaciones n° 2347883/2023).

Todo ello lleva a afirmar que la ejecutada mantuvo los beneficios antedichos, con fundamento en la cláusula primera transitoria de la Ley 6392, durante el lapso de tiempo en el que se devengó la deuda que el GCBA aquí reclama, o sea durante el año 2020.

En función de ello, corresponde hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazar la presente ejecución, con costas a la actora en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 64, CCAyT).

III.- En virtud de lo expuesto, RESUELVO:

1. Hacer lugar a la excepción interpuesta por la demandada, rechazando la presente ejecución, con costas a la actora (art. 64 del CCAyT).
2. Diferir la regulación de honorarios hasta una vez firme la presente.
3. Regístrese y notifíquese electrónicamente a las partes, y previo cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la ley 327, archívese.

